

Ineficiencia, falta de transparencia y corrupción

Nuevamente en las pasadas semanas las notas de prensa y las vistas públicas de la Cámara de Representantes relacionadas con el proceso de recuperación del País luego del paso del huracán Fiona alertan sobre los pobres resultados, las deficiencias en los procesos de prestación de servicios y la incapacidad en el uso de los fondos públicos designados para la recuperación y reconstrucción de la Isla. Es evidente que esta recuperación se agrava por la negligencia y el manejo deficiente de los fenómenos catastróficos que nos han afectado desde 2017. La opacidad de los datos y la desinformación, así como la incapacidad en la administración y operación del sistema eléctrico y de acueductos, la incompetencia en la gestión de las necesidades de salud y vivienda y la reparación de las carreteras durante las pasadas crisis han deteriorado la calidad de vida de los ciudadanos y aumentado los riesgos de corrupción.

La discusión pública vuelve a señalar el incumplimiento del gobierno y su incapacidad de generar resultados de manera ágil para satisfacer las necesidades de vivienda, electricidad, salud y reparación de carreteras. Así-

mismo, la prensa plantea la negligencia en el uso de fondos públicos y la influencia indebida de grupos de presión (cabilderos) que pone de manifiesto que decisiones públicas trascendentales como la contratación de la distribución energética otorgada a LUMA Energy y el proceso para contratar un proveedor de servicios para la generación de energía se toman en secreto y los criterios utilizados privilegian a amigos, políticos y familiares. Es reconocido que el deterioro de la calidad y el acceso a vivienda y servicios de electricidad ha empobrecido la calidad de vida de miles de ciudadanos, ha propiciado una disminución en los niveles de inversión y crecimiento económico y ha ocasionado la pérdida de cientos de empleos.

De acuerdo con el más reciente estudio del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa, los ciudadanos perciben que el soborno y las conexiones políticas son la forma más efectiva de obtener servicios públicos. Los datos de la encuesta de percepción de la corrupción realizada como parte del estudio son cónsonos con los múltiples casos de corrupción y tráfico de influencias que han sido reseñados por la prensa

de forma continua por la pasada década y se han hecho más frecuentes en el manejo de las crisis que nos han afectado desde 2017. También los ciudadanos perciben que políticos, empresarios y grupos de interés influyen de forma indebida, no necesariamente de manera ilegal, en la toma de decisiones gubernamentales. A modo de ejemplo, la encuesta de opinión advierte el riesgo de corrupción en las contrataciones, las compras, los procesos de subasta y las campañas políticas.

En lo que respecta al sector energético, el paso del huracán Fiona ha reafirmado que la falta de transparencia, la opacidad y la desinformación atrofian el proceso de toma de decisiones gubernamental para dar respuesta eficiente a las necesidades apremiantes de la ciudadanía. Los procesos de gestión y toma de decisiones deficientes y amaños, tanto desde el sector público como desde el sector privado, han empañado las respuestas adecuadas en un asunto de gran interés e impacto público que a su vez ha resultado ineficiente y muy opaco a ojos de la ciudadanía.

Igualmente, preocupante resulta la práctica recurrente de incorporar a la plantilla gubernamental ejecutivos, empleados, asesores y juntas directivas de gobierno a expolíticos y militantes activos a cargo de la recaudación de fondos de las campañas

políticas haciendo evidente la mala práctica de las puertas giratorias que abren espacio a la corrupción. Probablemente, si hubiera más transparencia y divulgación de información, la percepción generalizada de mal manejo de fondos públicos en el sector energético y el manejo ineficiente de la fiscalización en el uso de los fondos públicos podría contrastarse con argumentos sólidos sostenidos con información y datos categóricos y oportunos, pero ante la opacidad, la apariencia de sesgo y manipulación en la toma de decisiones y de mal manejo de los fondos públicos es innegable.

En este sentido, la relación con proveedores y contratistas requiere de un manejo eficiente y transparente y de procesos de supervisión y monitoreo del cumplimiento y verificación de indicadores que validen los resultados de la gestión y el uso eficiente y prudente de los recursos públicos. La realidad es que la ineficiencia, la incapacidad y la negligencia en el manejo de las necesidades apremiantes de energía eléctrica, vivienda, carreteras y salud durante los fenómenos naturales y la pandemia ha empobrecido la calidad de vida de nuestros ciudadanos y requiere acción inmediata del gobierno. Los tiempos disruptivos que vivimos representan una oportunidad para construir un mejor Puerto Rico para todos.



**Dra. Enelda
Torres
de Durand**

Directora
Ejecutiva Centro
de Gobernanza
Pública y
Corporativa